Señor(es)

**JUEZ CIVIL DE {% for item in filing\_city %}{{ item|upper }}{% endfor %}** **(REPARTO)**

E.S.D

**Asunto: ACCIÓN DE TUTELA de** {% if client\_type == ‘Persona Natural’ %}**{{ natural|upper }}**{% else %}**{{ legal|upper }}**{% endif %} **contra {{ company\_or\_entity\_name|upper }}**

**DISRUPCIÓN AL DERECHO S.A.S.,** sociedad identificada con Nit. 901.350.628 – 4, representada legalmente por Juan David Castilla Bahamón, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.738.766 y Tarjeta profesional 252414, sociedad que actúa como apoderada de {% if client\_type == ‘Persona Natural’ %}**{{ natural|upper }}**, quien se identifica con {{ complaining\_type\_id }} No. {{ complaining\_id\_number }}{% else %}**{{ legal|upper }}, sociedad debidamente constituida e identificada con Nit. {{** **complaining\_id\_number }}, representada por {{ legal\_representative\_name|title }} quien se identifica con {{ legal\_representative\_type\_id }} No. {{ legal\_representative\_id\_number }},**{% endif %} **con todo respeto manifiesto a usted que, en ejercicio del mecanismo constitucional de tutela consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, y demás normas regulatorias, por este escrito formulo acción de tutela contra {{ company\_or\_entity\_name|upper }}**, con el objeto de que se ampare el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO e IGUALDAD, consagrado en el artículo 13 y 29 Superior**, de conformidad con los siguientes:**

**HECHOS**

1. Que es intención de {% if client\_type == ‘Persona Natural’ %}**{{ natural|upper }}**{% else %}**{{ legal|upper }}**{% endif %}hacer parte del proceso contravencional y asistir a la audiencia de forma **VIRTUAL**.
2. Dado lo anterior, el día {{ date\_presentation }} {% if respond != ‘Se agendó exitosamente pero nunca se recibió el correo con la información’ %}se trató de realizar{% else %}se realizó{% endif %} el agendamiento de la audiencia **VIRTUAL** respecto del fotocomparendo No. {{ fotomulta\_number }}, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1843 de 2017 que señala:

*“(…) quienes operen sistemas automáticos y semiautomáticos para detectar infracciones de tránsito, implementará igualmente mecanismos electrónicos que permitan la* ***comparecencia a distancia del presunto infractor****.”* (subraya y negrilla fuera de texto)

{%p if respond == ‘Se agendó exitosamente pero nunca se recibió el correo con la información’ %}

No obstante lo anterior, la entidad accionada no ha informado la fecha, hora y link para acceder a la audiencia VIRTUAL de impugnación.

{%p endif %}

1. Que los artículos 135[[1]](#footnote-1), 136[[2]](#footnote-2), 137[[3]](#footnote-3) y 142[[4]](#footnote-4) de la Ley 769 de 2002, establecen que en el proceso contravencional se debe llevar a cabo a través de audiencia pública y en cualquier caso la persona tiene derecho a asistir, lo anterior en concordancia con el principio de transparencia y publicidad contenidos en los numerales 8 y 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). Nótese que al ser una audiencia pública, entre otras consecuencias, el fallo se notificará en estrados, dado lo cual, si la persona no asiste, no podrá presentar ningún tipo de recurso, negándose así cualquier tipo de defensa en el proceso contravencional.

{%p if respond != ‘La plataforma de la entidad solo permite agendar presencialmente’ %}

1. Que no obstante lo anterior, y luego de hacer la solicitud a través {% if request == ‘Llamada telefónica’ %}de llamada telefónica tal y como lo exige la misma entidad, pues es la única forma de solicitar a la autoridad el agendamiento de la audiencia{% elif request == ‘Correo electrónico’ %}de correo electrónico{% elif request == ‘Derecho de petición’ %}del derecho de petición{% else %}de la plataforma de la entidad{% endif %}, {% if respond != ‘Informó que ya venció el plazo para agendar’ %}la aquí accionada se ha negado a informar la fecha, hora y forma de acceso a la audiencia pública VIRTUAL, pues al parecer tienen una política y un procedimiento que solo ellos conocen y que el mismo puede limitar los derechos fundamentales de las personas como el debido proceso y mientras no se cumpla con los requisitos y condiciones arbitrarios por ellos impuestos y que van en contravía de la ley 769 de 2002, no reconocerán que la persona tiene el derecho al debido proceso{% else %}la aquí accionada informó que no agendará la audiencia pues al parecer estas dejan de ser públicas como lo establece la norma y se vuelven privadas y confidenciales cuando la persona, no está dentro del plazo para impugnar{% endif %}.

{%p endif %}

{%p if respond == ‘Solicitó poder autenticado’ %}

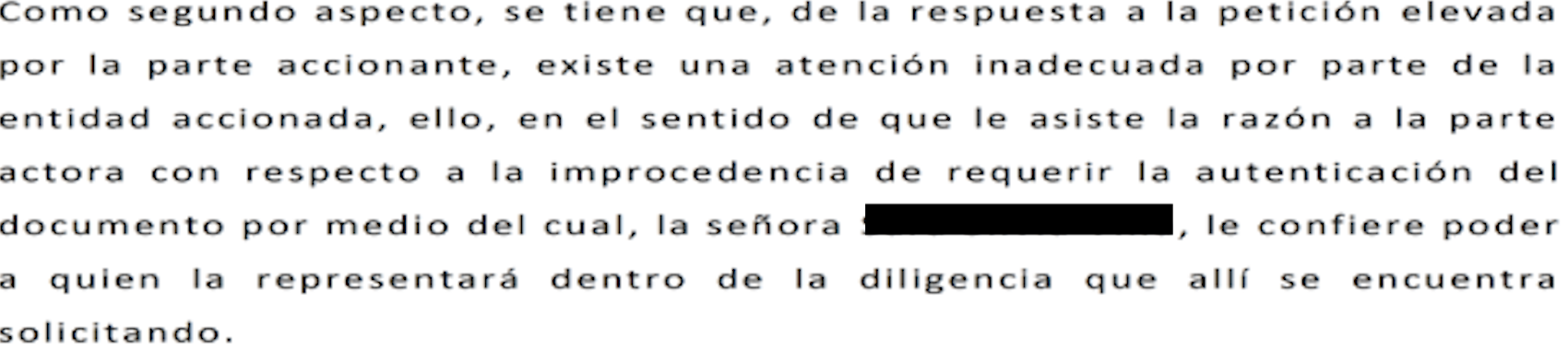
1. Debe advertirse que la entidad exigió que el poder que dio {% if client\_type == ‘Persona Natural’ %}**{{ natural|upper }}**{% else %}**{{ legal|upper }}**{% endif %}tenía que ser autenticado, no obstante lo anterior, la ley 769 de 2002 en su artículo 138 no exige que el poder deba ser autenticado. Dado lo anterior, si la norma que regula el procedimiento contravencional no exige que el poder sea autenticado por qué la entidad puede exigir tal requisito que no es legal y que sí limita el derecho fundamental de las personas.

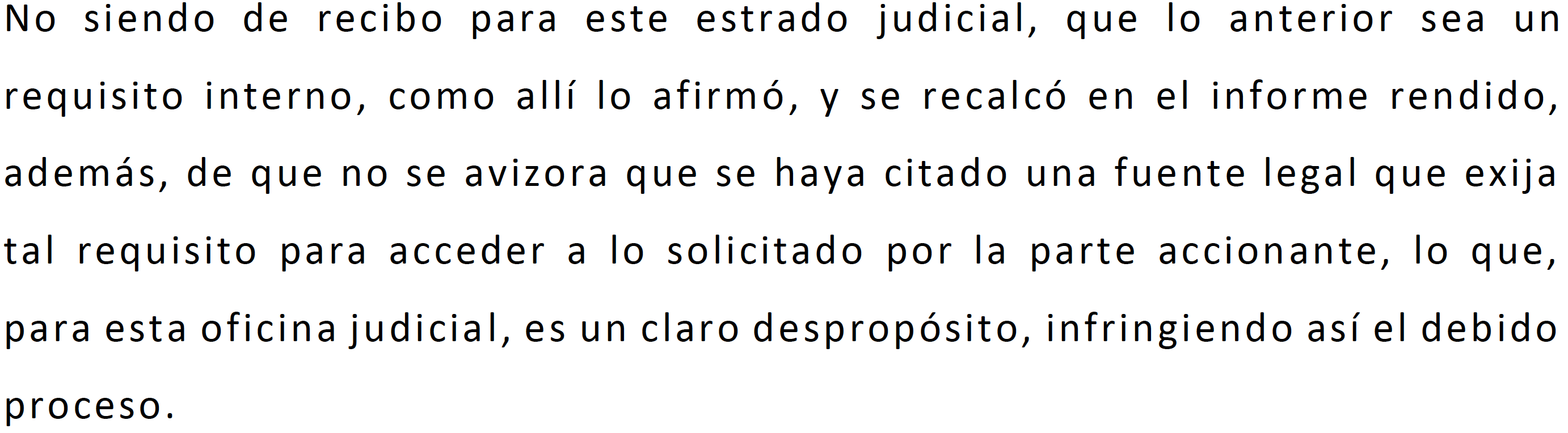
No obstante lo anterior, si la accionada pretende señalar que la ley 769 de 2002 en su artículo 162, establece que en casos no regulados por la ley debe remitirse a la aplicación del Código General del Proceso, el cual en su artículo 74 hace referencia a que el poder judicial debe ser presentado personalmente o autenticado. Debe tenerse en cuenta que tal exigencia no es aplicable gracias al Decreto 806 de 2020, que señala:

“*Artículo 1º. Este decreto tiene por objeto implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante (…) jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como, las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales (…)*

*Artículo 5º. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma,* ***se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento****.”* (subraya y negrilla fuera de texto)

Que los jueces sobre este aspecto ya han efectuado el análisis y han manifestado que:





{%p elif respond == ‘Solicitó que el correo sea con el nombre completo de la persona’ %}

1. Debe advertirse que la entidad informó que el correo electrónico del remitente tiene que ser un correo con el nombre de {% if client\_type == ‘Persona Natural’ %}**{{ natural|upper }}**{% else %}**{{ legal|upper }}**{% endif %}, pues de lo contrario no agendarán la audiencia VIRTUAL ya que para dicha entidad la cédula de ciudadanía no es el documento válido para identificar a la persona sino que la única forma de identificación es el nombre puesto en el correo electrónico. Así las cosas, para la entidad, el derecho fundamental al debido proceso se encuentra limitado y condicionado a que el correo electrónico tenga el nombre completo de la persona.

Dado lo anterior, debe observarse que si ya existe un correo electrónico con el nombre de una persona, y esta no puede crear el correo electrónico, para la entidad esa persona no puede agendar la audiencia VIRTUAL ni hacer parte del proceso contravencional, así, siempre que se quiera agendar la audiencia, la persona debe contar con la suerte que a nivel mundial esté disponible el correo electrónico con su nombre completo para así poderlo crear y de esta forma poder agendar la audiencia VIRTUAL.

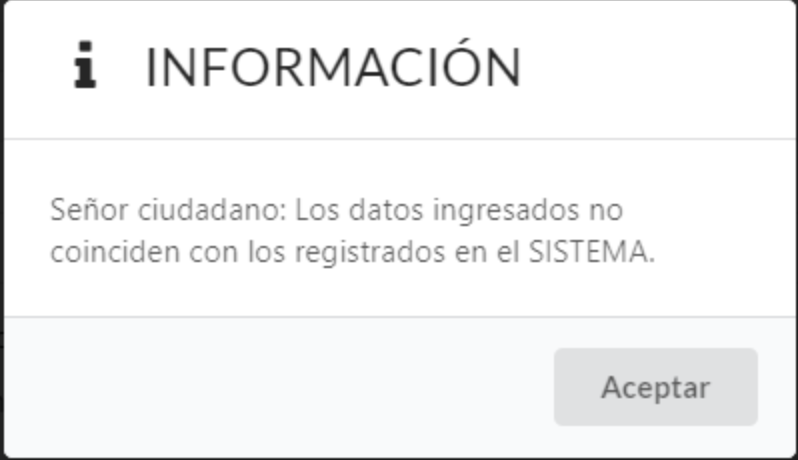
Se informa que ni la ley 769 de 2002 o la ley 1843 de 2017, y mucho menos la Constitución Política de Colombia han exigido tal requisito para poder ejercer el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO. Dado lo cual, carece de sustento que la entidad a través de políticas unilaterales y propias pueda modificar las normas abstractas y generales y limitar el derecho de las personas.

{%p elif respond == ‘Exige que sea a través de la plataforma de la entidad pero no se ha podido efectuar el agendamiento’ %}

1. Que bajo juramento manifestamos que a través de la plataforma de la entidad no se ha permitido realizar el agendamiento para comparecer VIRTUALMENTE a la audiencia de impugnación como único medio de defensa ante un proceso contravencional.

{%p elif respond == ‘El sistema de la entidad señala que los datos de la persona no corresponden a los registrados - por lo cual no permite ingresar a la plataforma para agendar la audiencia’ %}

1. Que la única forma para agendar la audiencia de impugnación es a través de la plataforma dispuesta por la entidad, sin embargo, al tratar de ingresar, el sistema de la entidad no permite pues señala que los datos de la persona no corresponden a los registrados, dado lo cual, por un error de la entidad al tener desactualizados o errados los datos de la persona, la accionada no permite agendar la audiencia de impugnación como único medio de defensa dentro del proceso contravencional.



Dado lo anterior, se pretendió agendar la audiencia y ejercer el único medio de defensa ante un proceso contravencional, pero por un error de la aquí accionada en sus sistemas, no se ha permitido ejercer el derecho de defensa y por lo tanto se ha vulnerado el DEBIDO PROCESO.

{%p elif respond == ‘La plataforma de la entidad solo permite agendar presencialmente’ %}

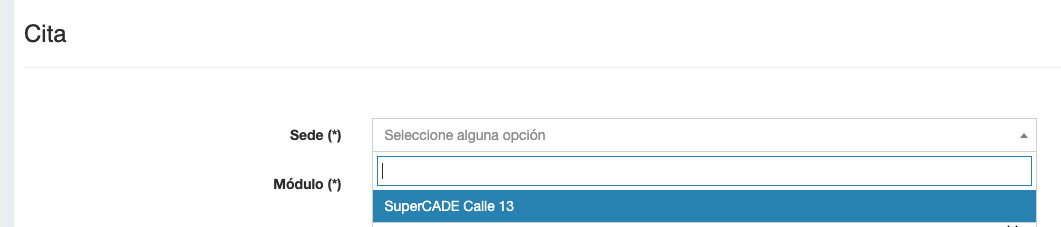
1. Que la única forma para agendar la audiencia de impugnación es a través de la plataforma dispuesta por la entidad, sin embargo, dicha plataforma sólo permite agendar la audiencia de forma PRESENCIAL y no permite de ninguna forma la VIRTUALIDAD como lo exige el artículo 12 de la ley 1843 de 2017.

{%p endif %}

{%p if “Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá” in company\_or\_entity\_name %}

1. Debe advertirse al despacho la ilegalidad de la aquí accionada ya que pretende inducir en error a las personas y las obliga a que agenden presencialmente la audiencia de impugnación cuando está en la obligación de garantizar la comparecencia VIRTUAL. Si la persona acepta de forma voluntaria y libre llevar a cabo la audiencia de impugnación de forma presencial ello no tiene ningún inconveniente, sin embargo, la entidad pretende que a través de su plataforma, la persona realice el agendamiento exclusivamente presencial y en ningún caso permite a la persona para que agende de forma VIRTUAL, dado lo cual es claro que vicia el consentimiento e induce en error a la persona.

Nótese que la única opción a seleccionar en la plataforma de la entidad es la calle 13 y no existe la alternativa de agendamiento virtual como lo exige el artículo 12 de la ley 1843 de 2017.



Dado lo anterior, la entidad no está garantizando la comparecencia virtual como lo exige el artículo 12 de la Ley 1843 de 2017, y no permite hacer parte del proceso contravencional.

Así las cosas, a la fecha no se ha podido agendar la audiencia de impugnación debido a que se pretende que la misma se agende de forma VIRTUAL y no se quiere la audiencia de forma PRESENCIAL.

{%p endif %}

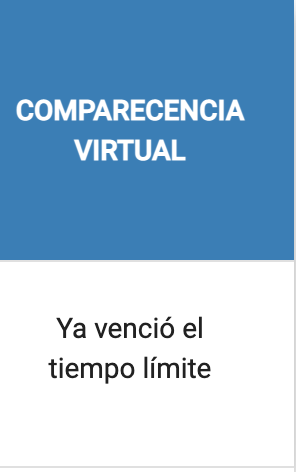
1. Debe señalarse que las audiencias son públicas y las personas tienen derecho a asistir a las mismas, más aún cuando la persona es el presunto contraventor.

{%p if respond == ‘Informó que ya venció el plazo para agendar’ %}

Así las cosas, la entidad no puede informar que ya venció el plazo que establece la ley para solicitar la audiencia, cuando la persona está solicitando que lo hagan parte del proceso contravencional pues éste tiene el derecho en asistir al proceso en su contra a través de la audiencia pública, y no es admisible que por vencerse un plazo, la entidad quede exenta de llevar a cabo la audiencia pública y menos aún quedar facultada para prohibir que el implicado haga parte de su propio proceso contravencional.

{%p if “Secretaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca” in company\_or\_entity\_name %}

Dado lo anterior, es una ilegalidad y vulnera el derecho fundamental al debido proceso que el sistema de la entidad señale que:



En definitiva, si no se ha proferido sanción, la entidad está obligada a realizar la audiencia pública, a la cual el implicado tiene el derecho a comparecer así sea solo para presentar los recursos contra la decisión que se profiera y no puede pretenderse que la entidad esté facultada para llevar a cabo el proceso contravencional negando al implicado hacer parte de la misma.

{%p endif %}

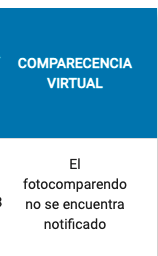
{%p endif %}

{%p if respond == ‘Aparece que no ha sido notificado’ %}

1. Que la aquí accionada no permitió efectuar el agendamiento de la audiencia de impugnación debido a que aparece que el comparendo no ha sido notificado. No obstante lo anterior, si la persona está tratando de realizar el agendamiento de la audiencia quiere decir que conoce de la existencia del comparendo. Así las cosas, la entidad no ha permitido efectuar el agendamiento de la audiencia para comparecer VIRTUALMENTE y así ejercer el único medio de defensa ante una infracción de tránsito.

{%p if “Secretaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca” in company\_or\_entity\_name %}

1. Debe advertirse al juez que la plataforma de la entidad lo único que informa es:



La anterior circunstancia obliga a que la persona tenga que ingresar diariamente a la plataforma hasta que la entidad quiera actualizar su sistema para poder agendar la audiencia de impugnación. Así las cosas, se está vulnerando el derecho fundamental al debido proceso pues la persona habiendo conocido el comparendo no ha podido solicitar el único medio de defensa ante un proceso contravencional de tránsito.

{%p endif %}

{%p endif %}

**MEDIDA PROVISIONAL**

Señor juez, teniendo en cuenta que la audiencia pública es un derecho de las personas se solicita como medida provisional la suspensión del proceso contravencional mientras no se resuelve la presente acción de tutela, toda vez que la entidad pretende llevar a cabo el proceso contravencional sin que {% if client\_type == ‘Persona Natural’ %}**{{ natural|upper }}**{% else %}**{{ legal|upper }}**{% endif %}pueda hacer parte del mismo. Lo anterior de conformidad con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha manifestado respecto de la medida provisional:

“*i) proteger los derechos de los demandantes con el fin de* ***impedir que un eventual amparo se torne ilusorio****; ii)* ***salvaguardar los derechos fundamentales*** *que se encuentran en* ***discusión o en amenaza de vulneración****; (…)*”[[5]](#footnote-5) (subraya y negrilla fuera de texto)

Así las cosas, es necesario y urgente que se suspenda el proceso contravencional pues de no hacerlo se continuará con el mismo al punto que se efectuará la audiencia sin la asistencia de {% if client\_type == ‘Persona Natural’ %}**{{ natural|upper }}**{% else %}**{{ legal|upper }}**{% endif %}y la entidad declarará la responsabilidad contravencional por no haber hecho parte del proceso contravencional haciendo que el eventual amparo se torne ilusorio.

{%p if “Secretaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca” in company\_or\_entity\_name %}

Debe señalarse al juez que el modus operandi de la entidad, es proceder a proferir la resolución sancionatoria, una vez conoce que la persona presenta derecho de petición o acción de tutela para solicitar la audiencia. Para probar lo anterior se hace referencia a los siguientes casos:

**Solicitudes hechas por derecho de petición:**

En los siguientes casos se muestra la necesidad y urgencia de la medida provisional, pues en todos ellos se solicitó la audiencia a través de derecho de petición y la autoridad decidió guardar silencio y proferir resolución sancionatoria.

En el caso del comparendo No. 25612001000028862411, el día 14 de diciembre de 2020 se radicó derecho de petición solicitando la audiencia y ese mismo día la entidad profiere resolución sancionatoria No. 4434.

En el caso del comparendo No. 25740001000029217206, el día 10 de diciembre de 2020 se radicó derecho de petición solicitando audiencia y la entidad sin dar ninguna respuesta el día 14 de diciembre de 2020 profirió la resolución sancionatoria No. 18158.

En el caso del comparendo No. 25740001000029217205, el día 10 de diciembre de 2020 se radicó derecho de petición solicitando audiencia y la entidad sin dar ninguna respuesta el día 14 de diciembre de 2020 profirió la resolución sancionatoria No. 18157.

En el caso del comparendo No. 25612001000029297471, el día 15 de diciembre de 2020 se presentó derecho de petición solicitando audiencia y la entidad sin dar ninguna respuesta el 17 de febrero de 2021 profirió la resolución sancionatoria No. 7471.

Estos son unos pocos ejemplos.

**Solicitudes hechas a través de acción de tutela:**

En los siguientes casos, se muestra la vulneración al debido proceso cuando el juez niega la medida provisional:

Tutela 2021-013, en la tutela se solicitaba el amparo al debido proceso para que la entidad agendara la audiencia, el caso fue admitido el 28 de enero de 2021 y la entidad el 4 de febrero de 2021 profirió la resolución sancionatoria No. 23417.

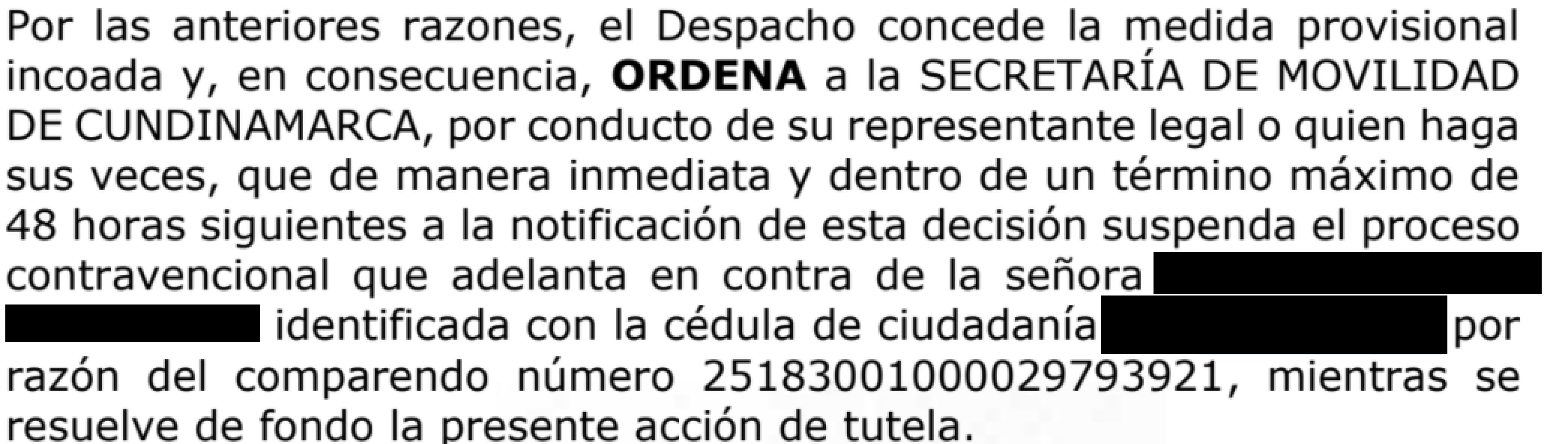
Tutela 251264089002-20210002700, en la tutela se solicitaba el amparo al debido proceso para que la entidad agendara la audiencia, el caso fue admitido el 4 de febrero de 2021 y la entidad el 8 de febrero de 2021 profirió la resolución sancionatoria No. 4400.

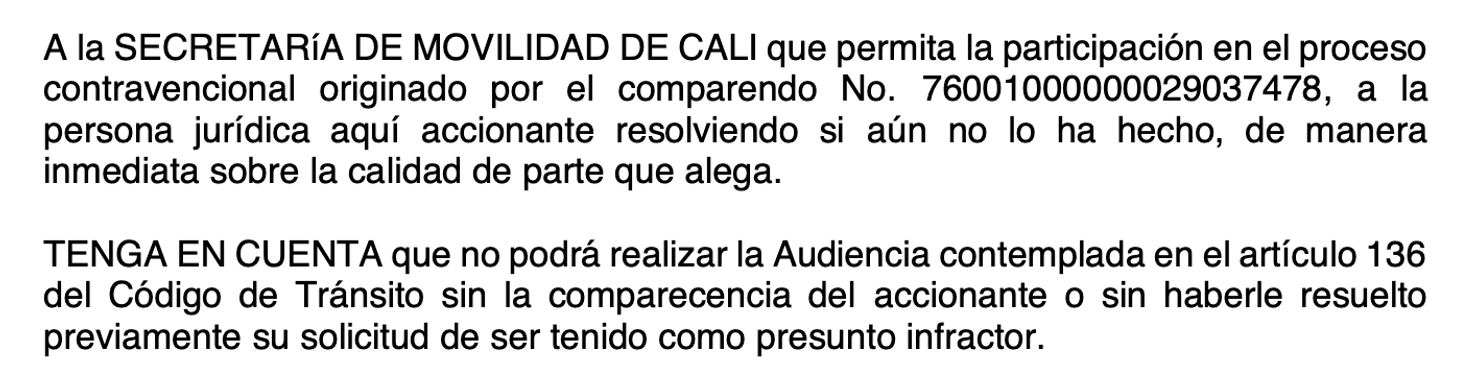
Toda la información entregada se cierta y se da a conocer bajo la gravedad de juramento, sin embargo no se aportan todos los documentos que prueban lo mismo bajo el principio de buena fe del artículo 83 Superior. Si su despacho considera necesario revisar los documentos se enviaran inmediatamente se requieran.

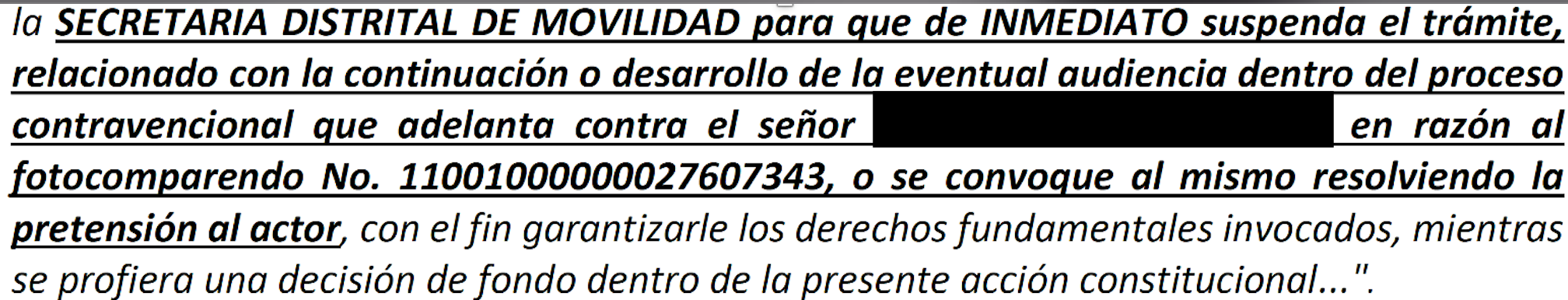
Se informa al juez que sobre tales actuares de los funcionarios de la secretaría de movilidad ya se están presentando las acciones disciplinarias y penales.

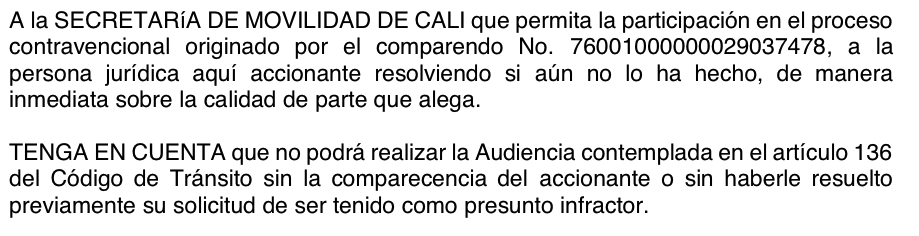
{%p endif %}

Así mismo, se deja constancia que en casos similares el juez se ha pronunciado así:









**PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA**

A continuación, se expondrán las razones por las cuales la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad como lo son: (i) subsidiariedad; (ii) inmediatez y, (iii) legitimación en la causa por activa y pasiva.

1. **Principio de subsidiariedad**

Teniendo en cuenta la vulneración al **DEBIDO PROCESO**, debe referirse que la Corte Constitucional ha expresado respecto al requisito de subsidiariedad o procedibilidad de la acción de tutela que:

“(…) *en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la Corte Constitucional ha considerado que “****pueden presentarse situaciones en las cuales los servidores públicos ejercen sus atribuciones separándose totalmente del ordenamiento jurídico****, en abierta contradicción con él,* ***de tal forma que se aplica la voluntad subjetiva de tales servidores*** *y, como consecuencia, bajo la apariencia de actos estatales, se configura materialmente una arbitrariedad, denominada vía de hecho”[27].* ***En tales casos, la Corte excepcionalmente ha admitido la procedencia de la acción de tutela, cuando se advierte o bien la inminencia de un perjuicio irremediable o la falta de idoneidad de los otros mecanismos judiciales de defensa*.**”[[6]](#footnote-6) (Subraya y negrilla fuera de texto)

Así mismo, la Corte Constitucional manifestó:

“*Así las cosas, el mencionado* ***principio de legalidad*** *es una de las manifestaciones de lo que la Carta Magna instituyó como* ***debido proceso****, el cual es definido por la jurisprudencia de esta Corporación como “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”[11]. Este derecho fundamental es “aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”[12],* ***y puede ser protegido cuando se encuentre amenazado o sea vulnerado por parte de una autoridad pública o de un particular, a través de la acción de tutela***.”[[7]](#footnote-7) (subraya y negrilla fuera de texto)

Adicional a lo anterior, se informa que el único objetivo de la acción de tutela es la comparecencia **VIRTUAL** a la audiencia y en ningún caso se pretende con la acción de tutela reemplazar el proceso contravencional.

1. **Principio de inmediatez**

Desde 1992, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado el contenido del principio de inmediatez. Para tales efectos, ha indicado que si bien la acción de tutela no tiene un término de caducidad señalado en la Constitución Política o la ley, esta solo resultará procedente si se presenta en un término razonable desde el momento en que se produce la presunta vulneración de las garantías fundamentales[[8]](#footnote-8). Dicho principio de inmediatez fue desarrollado inicialmente en la Sentencia SU-961 de 1992[[9]](#footnote-9) en la que se señaló:

*“Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.*

*Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción”.*

En el caso concreto conforme a los antecedentes referenciados en los hechos de la presente acción tutelar, la presente acción constitucional se presenta dentro de un término razonable.

1. **Legitimación en la causa por activa y pasiva**

En virtud de lo señalado en el artículo 86 Superior, todas las personas están legitimadas para presentar acción de tutela ante los jueces para la protección de sus derechos fundamentales, bien sea actuando directamente o por medio de otra persona que actúe a su nombre. En la misma línea, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela “*podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos”.*

En esta oportunidad, el accionante como persona afectadase encuentra legitimado por activa para actuar en procura de la protección del derecho fundamental al debido proceso.

En el caso concreto, el requisito de legitimación por pasiva se encuentra satisfecho, en tanto que la entidad aquí accionada vulneró los derechos fundamentales ya referenciados.

**DERECHOS CUYA PROTECCIÓN SE DEMANDA**

El **DEBIDO PROCESO**, consagrado en la Constitución Política de Colombia, establece:

*“ARTICULO 29. El debido proceso se* ***aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.***

*Nadie podrá ser juzgado* ***sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa****, ante juez o tribunal competente y* ***con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio****.”* (Subraya y negrilla fuera de texto)

Dado lo anterior, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido los siguientes elementos del debido proceso administrativo, como garantías mínimas:

“*DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-****Garantías mínimas***

*Existen unas garantías mínimas en virtud del derecho al debido proceso administrativo, (…) (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y* ***con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico,*** *(vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso.”[[10]](#footnote-10)*

Teniendo en cuenta lo antes citado, debe analizarse la ley 1843 de 2017 por medio de la cual:

“*(…) se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones”*

La referencia ley establece en su artículo 12 que**:**

“*ARTÍCULO 12.* ***COMPARECENCIA VIRTUAL****. Dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta ley, quienes operen* ***sistemas automáticos y semiautomáticos para detectar infracciones de tránsito****, implementará igualmente* ***mecanismos electrónicos que permitan la comparecencia a distancia del presunto infractor****.” (subraya y negrilla fuera de texto).*

Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que el comparendo No. {{ fotomulta\_number }} fue impuesto por medios tecnológicos, el ordenamiento jurídico señala que la entidad al usar dichos medios tecnológicos debe garantizar la comparecencia virtual.

Así las cosas, y para garantizar de forma mínima el debido proceso que tienen las personas, como lo es que se respete las formas propias del proceso contravencional, desde un inicio se ha querido y pretendido el agendamiento de la audiencia de forma **VIRTUAL**, no obstante lo anterior, no ha sido posible realizar tal agendamiento.

Se reitera que a través de la acción de tutela no se pretende sustituir el único medio de defensa en el proceso contravencional como lo es la audiencia pública VIRTUAL. Lo único que se solicita es que la audiencia se lleve a cabo de forma VIRTUAL pues el comparendo fue impuesto por medios tecnológicos y en razón a ello, el ordenamiento jurídico señala que debe facilitarse a la persona la comparecencia virtual, pues de no garantizarse tal comparecencia VIRTUAL, se estaría vulnerando el debido proceso ya que no se está respetando la forma propia del procedimiento contravencional de conformidad con el artículo 12 de la ley 1843 de 2017.

{%p if respond == ‘Solicitó poder autenticado’ or respond == ‘Solicitó que el correo sea con el nombre completo de la persona’ %}

Por otro lado, se informa al despacho que ni la ley 769 de 2002 ni la ley 1843 de 2017, impusieron requisitos para el agendamiento de la audiencia, lo anterior teniendo en cuenta que solicitar la audiencia es una manifestación propia del debido proceso, derecho fundamental que no puede estar limitado, condicionado o restringido por las políticas internas propias de la entidad que lo único que pretenden es restringir el acceso de las personas al proceso contravencional.

Así mismo, en ninguna parte de la Ley 769 de 2002 o de la ley 1843 de 2017, se establece que la autoridad de tránsito podrá establecer requisitos o condicionar o limitar el agendamiento VIRTUAL de la audiencia. Dado lo cual, no se entiende las razones por las cuales dichas entidades puedan a su capricho exigir cualquier tipo de requisitos o condiciones que imposibilitan, restringen o limitan el derecho al debido proceso de las personas.

{%p elif respond == ‘Informó que ya venció el plazo para agendar’ %}

Dado lo antes expuesto, si la ley 769 de 2002 en sus artículos 135, 136, 137y 142, antes referenciados y debidamente citados, establecen que el proceso contravencional se debe llevar a cabo a través de una audiencia pública y si los artículos 8 y 9 de la ley 1437 de 2011 establecen el principio de transparencia y publicidad de todas las actuaciones administrativas, no se entiende la razón jurídica por la cual la entidad está en la facultad de negar la asistencia a la audiencia y al proceso contravencional de la persona presuntamente contraventora.

Lo anterior claramente vulnera el DEBIDO PROCESO pues la entidad está no solo modificando el proceso contravencional sino que está desconociendo las garantías mínimas del debido proceso y está haciendo que de un proceso público ahora sea privado y confidencial donde las personas implicadas no pueden hacer parte del mismo.

Si bien es cierto la ley otorga un plazo de 11 días hábiles desde la notificación para solicitar la impugnación del comparendo, también lo es que la persona tiene todo el derecho de asistir a su propio proceso para al menos presentar los recursos que por ley tiene derecho.

{%p elif respond == ‘Exige que sea a través de la plataforma de la entidad pero no se ha podido efectuar el agendamiento’ %}

Que si bien es cierto la aquí accionada tiene una plataforma dispuesta para el agendamiento de las audiencias, debe advertirse que a través de la misma no se ha podido realizar tal agendamiento. Dado lo anterior, es clara la vulneración al debido proceso pues la persona no puede ejercer el único medio de defensa establecido por la ley 769 de 2002, para defenderse ante un proceso contravencional y todo por las fallas de la plataforma de la entidad.

{%p elif respond == ‘Se agendó exitosamente pero nunca se recibió el correo con la información’ and respond == ‘No se ha tenido ninguna respuesta de la entidad’ %}

Si bien es cierto se procedió con el agendamiento VIRTUAL de la audiencia, a la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte de la entidad. Así las cosas, se vulnera el DEBIDO PROCESO pues a la persona ni siquiera se le ha informado el día, hora y link para hacer parte de la audiencia de impugnación y así ejercer su derecho de defensa.

A la fecha, se desconoce las razones por las cuales la entidad no ha querido dar a conocer la información de la audiencia y no se sabe si efectivamente se podrá ejercer el derecho de defensa dado el silencio guardado por la autoridad, corriéndose el riesgo que la misma haya continuado con el proceso contravencional desconociendo la solicitud efectuada.

{%p elif respond == ‘Aparece que no ha sido notificado’ %}

A la fecha de la presente tutela, la entidad no ha permitido realizar el agendamiento VIRTUAL de la audiencia debido a que informa que no ha sido notificado el comparendo. Sin embargo, ello no puede ser un impedimento para agendar la audiencia de impugnación pues si la persona ya conoce de la existencia del comparendo tiene el derecho de solicitar el único medio de defensa que tiene dentro del proceso contravencional.

Es un absurdo que se exija que la persona espere hasta que la entidad quiera actualizar la información de la base de datos para luego si agendar la audiencia, lo que impone a la persona una carga absurda de tener que revisar diariamente la información de la entidad hasta que esta la quiera actualizar.

{%p elif respond == ‘El sistema de la entidad señala que los datos de la persona no corresponden a los registrados’ %}

Si bien es cierto la entidad tiene disponible la plataforma para realizar el agendamiento VIRTUAL de la audiencia de impugnación, también lo es que por un error de la misma, no ha sido posible realizar el agendamiento. Nótese lo absurdo al decirle al titular de la información que su propia información como nombre e identificación está errada.

Lo anterior evidencia, que por un error propio y exclusivo de la entidad al tener errada la información en sus sistemas vulnera el derecho al DEBIDO PROCESO pues limita y restringe dicho derecho fundamental ya que la persona no podrá agendar la audiencia, único medio de defensa en el proceso contravencional por un error ajeno el cual no puede evitar, al punto que se vencerán los términos y la entidad proferirá resolución sin que la persona se le permitiese asistir a su propio proceso contravencional.

{%p elif respond == ‘La plataforma de la entidad solo permite agendar presencialmente’ %}

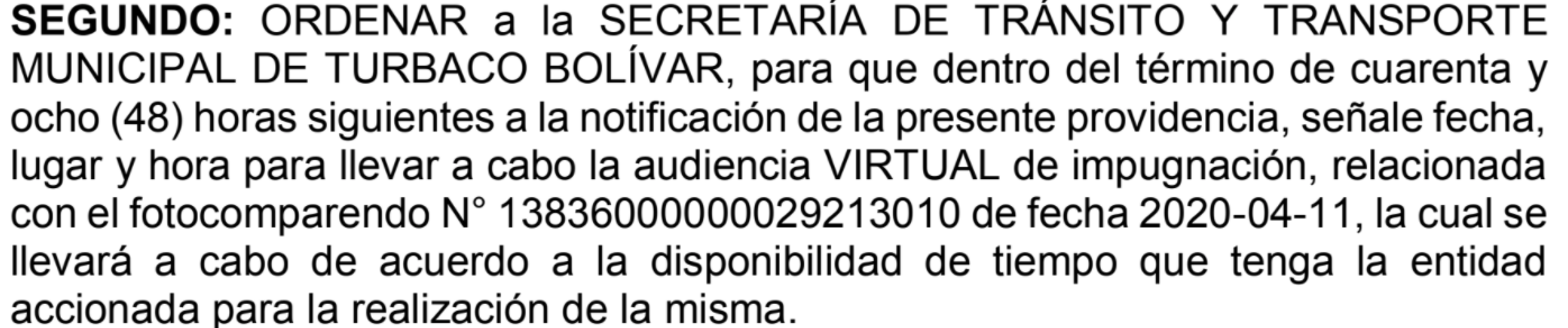
Si bien es cierto, la entidad tiene disponible una plataforma para realizar el agendamiento de la audiencia, también lo es que dicha plataforma solo permite realizar el agendamiento de forma presencial.

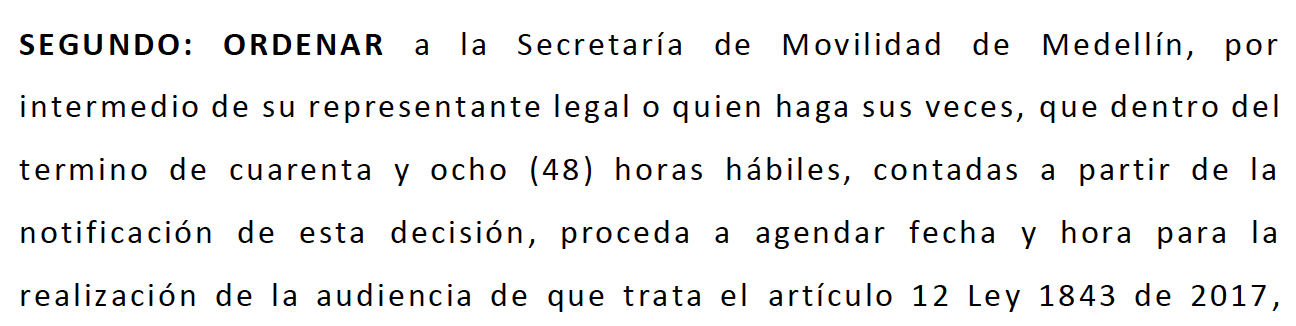
Así las cosas, y teniendo en cuenta que en comparendos detectados por medios tecnológicos la entidad está obligada a permitir la comparecencia VIRTUAL, la anterior restricción y limitación vulnera una de las garantías mínimas del debido proceso, como lo es cumplir con el procedimiento establecido por la ley, que para efectos del presente caso es el artículo 12 de la ley 1843 de 2017.

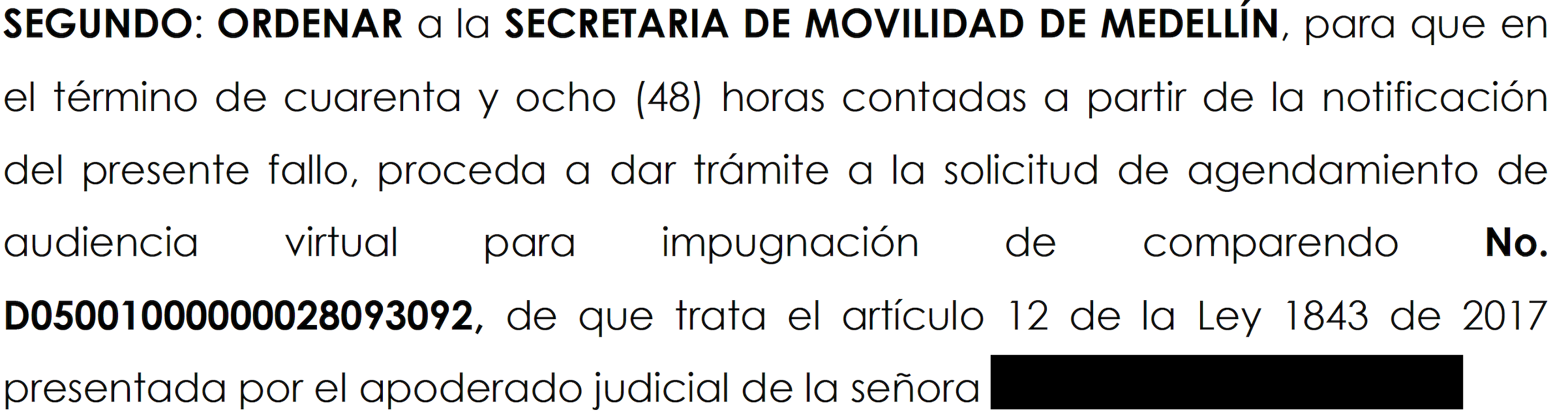
Por lo anterior, mientras la entidad no permita la comparecencia VIRTUAL como lo exige la ley, se vulnera el DEBIDO PROCESO del presunto infractor pues éste tiene el derecho a comparecer VIRTUALMENTE al proceso contravencional pero la entidad le exige que sea presencial, sin importar si la persona o su abogado residen en una jurisdicción diferente.

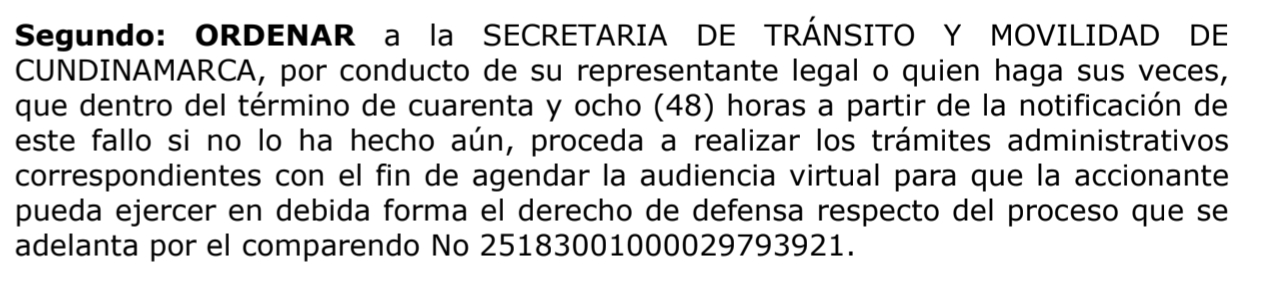
{%p endif %}

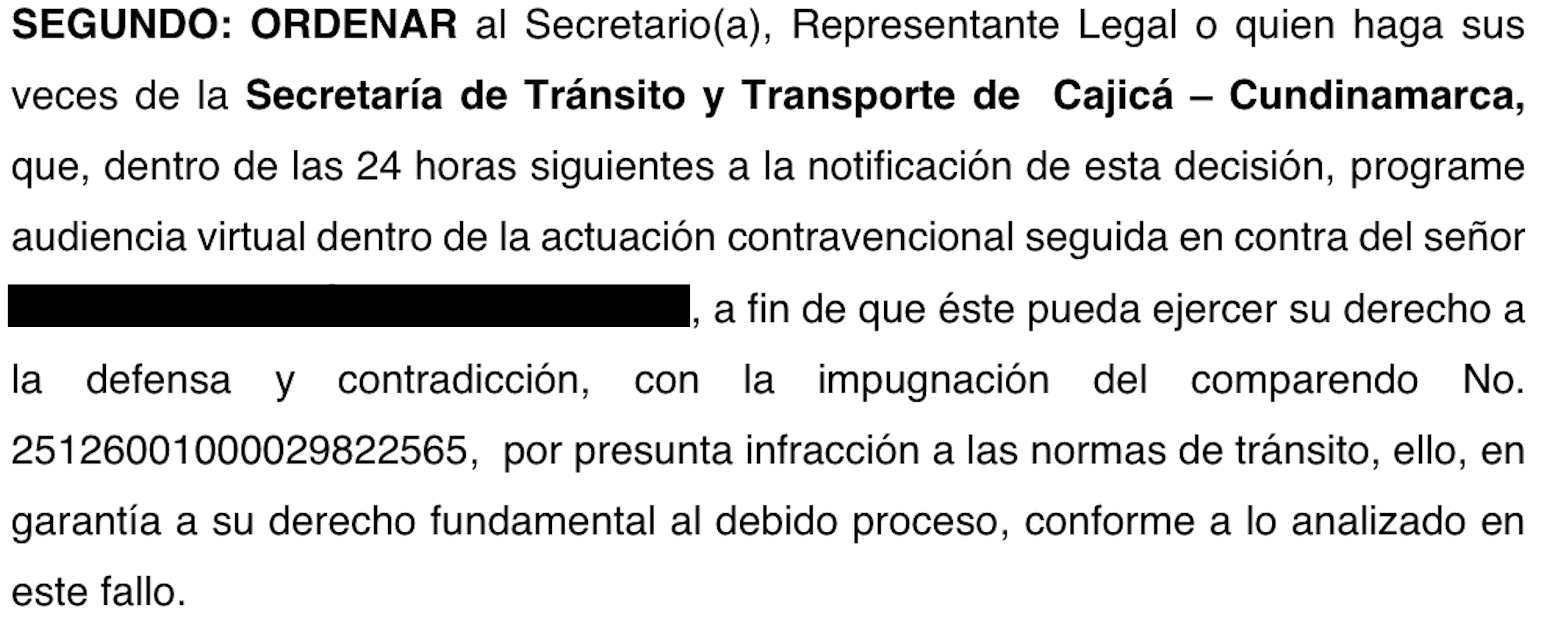
Dado lo anterior, se informa al despacho que otros jueces ya han analizado casos similares a este y han fallado en el siguiente sentido:

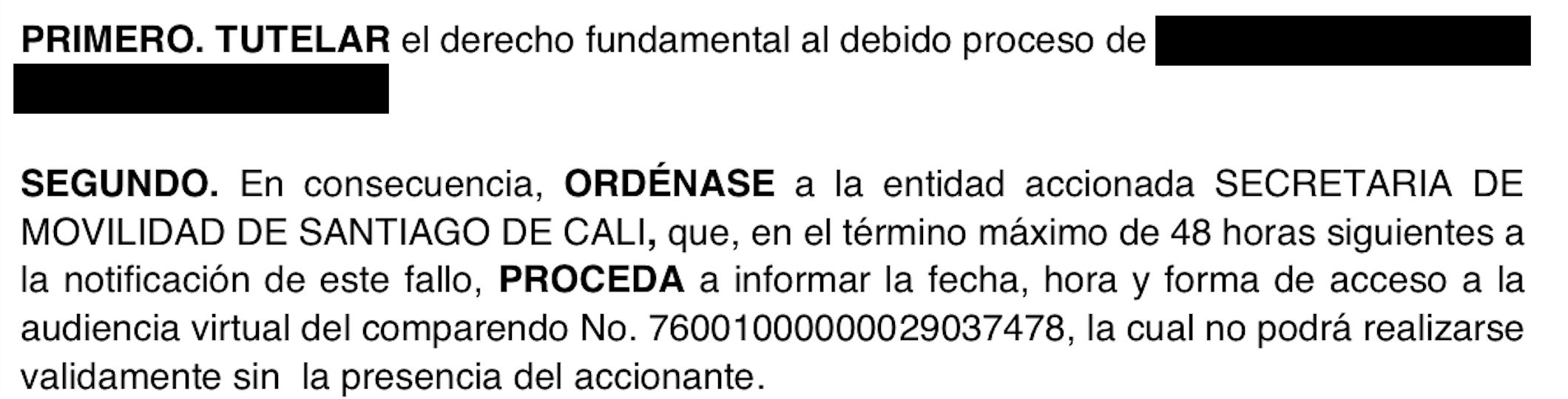


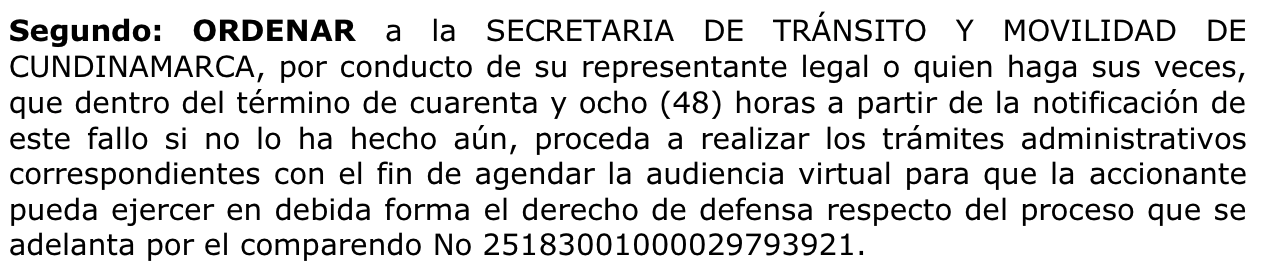










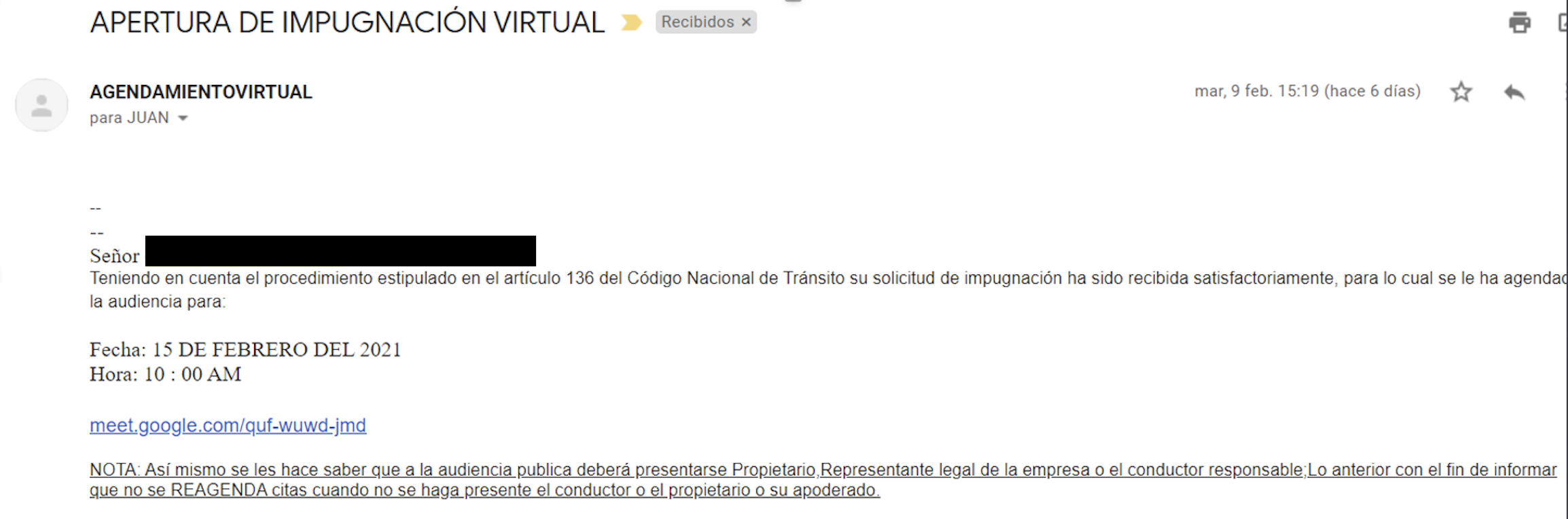


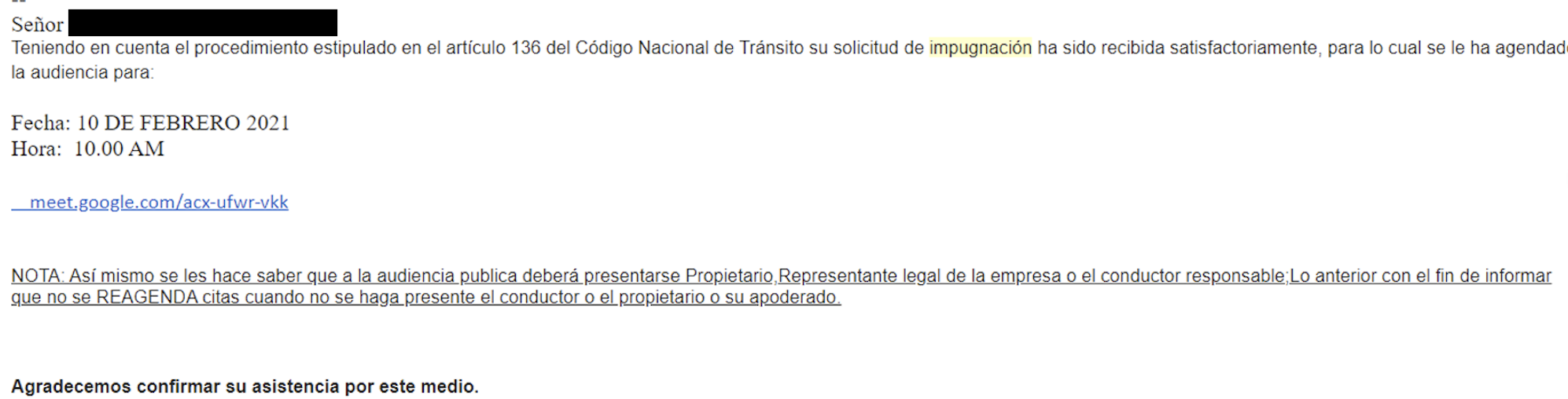
Por otro lado, se hace necesario señalar que el derecho fundamental a la **IGUALDAD**,consagrado en la Constitución Política de Colombia, establece:

“*ARTICULO 13.* ***Todas las personas*** *nacen libres e* ***iguales ante la ley****, recibirán la* ***misma protección y trato de las autoridades*** *y gozarán de los* ***mismos derechos, libertades y oportunidades*** *sin ninguna discriminación por razones de (…)*”(Subraya y negrilla fuera de texto)

Así las cosas, y como se verá más adelante, se está vulnerando este derecho, ya que las entidades agendan virtualmente cuando la persona le fue impuesto un comparendo por medios electrónicos, pero en el presente caso la entidad no ha permitido, al igual que a las otras personas, la asistencia a la audiencia de impugnación de forma virtual.

Como ejemplo se presentan los siguientes casos donde la entidad procedió con el agendamiento Virtual:

****

****

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

zGraphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Lo anterior, es una pequeña muestra que las entidades en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 1843 de 2017, sí agendan virtualmente, pues ello es garantía del debido proceso.

Dado lo anterior, si en casos exactamente similares al presente, las entidades de movilidad han procedido con el agendamiento de la audiencia de forma VIRTUAL, no se entiende la razón por la cual en un caso fáctica y jurídicamente igual, la entidad no ha permitido tal agendamiento.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Fundamento esta acción en el artículo 13, 29 y 86 de la Constitución Política de Colombia.

**PRETENSIONES**

1. **AMPARAR** el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO e IGUALDAD.
2. **ORDENAR** a {{ company\_or\_entity\_name|upper }} para que proceda a informar la audiencia VIRTUAL suministrando fecha, hora y forma de acceso a la audiencia VIRTUAL para ejercer en debida forma el derecho de defensa respecto del comparendo No. {{ fotomulta\_number }}.
3. Se le recuerde a la entidad que las audiencias son públicas de conformidad con el párrafo tercero del numeral tercero del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, y por lo tanto están en la obligación de dar acceso a dicha audiencia.

**PRUEBAS**

1. {%p if request == ‘Llamada telefónica’ %}
2. Registro de llamada
3. {%p elif request == ‘Correo electrónico’ %}
4. Correo electrónico
5. {%p elif request == ‘Plataforma de la entidad’ %}
6. Pantallazo plataforma
7. {%p else %}
8. Derecho de petición y constancia de radicación
9. {%p endif %}
10. {%p if respond == ‘Se agendó exitosamente pero nunca se recibió el correo con la información’ or respond == ‘No se ha tenido ninguna respuesta de la entidad’ %}
11. Constancia solicitud agendamiento.
12. {%p endif %}
13. {%p if request != ‘Llamada telefónica’ %}
14. {%p if respond == ‘Solicitó poder autenticado’ or respond == ‘Solicitó que el correo sea con el nombre completo de la persona’ or respond == ‘Informó que ya venció el plazo para agendar’ %}
15. Respuesta de la entidad.
16. {%p endif %}
17. {%p endif %}
18. {%p if respond == ‘Aparece que no ha sido notificado’ %}
19. Constancia comparendo no notificado
20. {%p endif %}
21. {%p if respond == ‘Exige que sea a través de la plataforma de la entidad pero no se ha podido efectuar el agendamiento’ %}
22. Constancia error de la plataforma
23. {%p endif %}
24. Poder.
25. Certificado de existencia y representación legal de Disrupción al Derecho S.A.S.
26. {%p if client\_type == ‘Persona Jurídica’ %}
27. Certificado de existencia y representación legal de {{ legal|title }}
28. {%p endif %}

**JURAMENTO**

Manifiesto señor juez, bajo la gravedad de juramento, que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra el mismo accionado.

**NOTIFICACIONES**

La parte accionada las recibirá al correo electrónico:

* {{ email }}
* {%p if email2!=’NA@gmail.com’ %}
* {{ email2 }}
* {%p endif %}
* {%p if email3!=’NA@gmail.com’ %}
* {{ email3 }}
* {%p endif %}
* {%p if email4!=’NA@gmail.com’ %}
* {{ email4 }}
* {%p endif %}

La parte accionante en el correo electrónico:

* {{ouremail}}

Del señor juez,

Diagram

Description automatically generated

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juan David Castilla Bahamón

**Representante Legal**

**DISRUPCIÓN AL DERECHO S.A.S.**

1. *“en la* ***audiencia****, para la que se le cite, se decretarán o practicarán las pruebas que solicite (…)”* [↑](#footnote-ref-1)
2. *“deberá comparecer ante el funcionario en* ***audiencia pública*** *para que éste decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles.*

   *En Ia misma* ***audiencia****, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado”* [↑](#footnote-ref-2)
3. *“para que en* ***audiencia pública*** *estos permitan sancionar o absolver al inculpado bajo claros principios de oportunidad, transparencia y equidad.”* [↑](#footnote-ref-3)
4. *“El recurso de reposición procede contra los autos ante el mismo funcionario y deberá interponerse y sustentarse en la propia* ***audiencia*** *en la que se pronuncie.”* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Sentencia T-103 de 2018* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Sentencia T-682 e 2015.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Sentencia T-559 de 2015* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Al respecto, ver entre otras: Corte Constitucional. Sentencias T- 091 de 2018 M.P. Carlos Bernal Pulido, T-077 de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, T-038 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, T-332 de 2015.*  [↑](#footnote-ref-8)
9. *M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.*  [↑](#footnote-ref-9)
10. *Sentencia T-010 de 2017.* [↑](#footnote-ref-10)